

GACETA OFICIAL

ORGANO DEL ESTADO

AÑO LXXXI

PANAMA, R. DE P., VIERNES 27 DE ABRIL DE 1984

Nº 20.045

CONTENIDO

CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACION

Ley N° 9 de 18 de abril de 1984, por la cual se regula el ejercicio de la abogacía.

AVISOS Y EDICTOS

CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACION

REGULASE EL EJERCICIO DE LA ABOGACIA

LEY No. 9 (de 18 de abril de 1984)

Por la cual se regula el ejercicio de la abogacía.

EL CONSEJO NACIONAL
DE LEGISLACION
DECRETA

CAPITULO I

CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION DE ABOGADO

Artículo 1: Para ejercer la profesión de abogado se requiere poseer certificado de idoneidad expedido por la Corte Suprema de Justicia y ser miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

Artículo 2: El Colegio Nacional de Abogados admitirá como miembros a todo abogado que haya obtenido certificado de idoneidad, conforme el artículo anterior, salvo que el interesado haya sido condenado, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de expedición del respectivo certificado de idoneidad por delito contra la administración pública, el patrimonio, la fe pública o la administración de justicia.

Artículo 3: La Corte Suprema de Justicia sólo otorgará en lo sucesivo certificados de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado a quienes reúnan los siguientes requisitos:

1. Ser nacional panameño;

2. Poseer título profesional en derecho expedido por la Universidad de Panamá, la Universidad Santa María La Antigua, o por cualquier otra institución universitaria que se establezca en el futuro en la República de Panamá y cuyos títulos la Ley reconozca su valor oficial; y

3. Posseer título profesional de derecho obtenido en Universidad de recono-

cido prestigio, el cual deberá ser previamente revalidado en la Universidad de Panamá, salvo en el caso de convenios internacionales que en términos claros y precisos eximan al interesado de la obligación de revalidar su título profesional.

Artículo 4: La profesión se ejerce por medio de poder legalmente constituido o asesorando a la parte interesada y, entre otras cosas, comprende:

1. La representación judicial ante la jurisdicción civil, penal, laboral, de menores, electoral, administrativa, marítima y cualquiera otra jurisdicción que exista o que se establezca en el futuro.

2. La resolución de consultas jurídicas por escrito o verbalmente.

3. La redacción de alegatos, testimonios, minutas y memoriales dirigidos a cualquier funcionario.

4. La preparación de documentación jurídica relacionada con la constitución, funcionamiento, disolución y liquidación de sociedades.

5. La redacción de toda clase de contratos.

6. La gestión de negocios administrativos.

7. La inscripción de documentos en el Registro Público o en el Registro Civil, y las gestiones, recursos y reclamaciones a que den motivo la descalificación y reparo de esos documentos.

8. El acompañamiento a cualquier persona en toda gestión o diligencia en que sean solicitados sus servicios.

9. La calidad de Agente Residente para los efectos del Artículo 10 y 2 de la Ley 32 de 1927.

10. Cualquier otra actividad o gestión no incluida expresamente en este artículo para las cuales se requerirá la calidad de abogado.

Artículo 5: En lo sucesivo no se concederán nuevas autorizaciones para ejercer en calidad de agente judicial o agente administrativo.

Los agentes judiciales y administrativos a quienes la Corte Suprema de Justicia le haya otorgado certificado de idoneidad con anterioridad a la vigencia de esta Ley, sólo podrá gestionar ante los Jueces y Personeros Municipales y funcionarios administrativos que tengan jurisdicción en un solo distrito, y ante los Jueces de Circuito y los funcionarios administrativos, en apelación, en los negocios que hayan ventilado en la primera instancia.

Artículo 6: Toda persona que considere tener derecho a obtener certificado de idoneidad para ejercer la abogacía deberá dirigir su solicitud por escrito a la Corte Suprema de Justicia y acompañar las pruebas previstas en el artículo 3 de la presente Ley. La Corte Suprema de Justicia dentro de los quince días siguientes decidirá la solicitud y, si la resolución fuere favorable, expedirá al peticionario el correspondiente certificado.

Artículo 7: En todos los tribunales de justicia se llevará un registro especial destinado a inscribir los nombres de las personas autorizadas para ejercer la abogacía. Con tal fin, la Corte hará publicar la resolución por la cual se ordena expedir el certificado. El interesado podrá hacer registrar el certificado correspondiente ante cualquiera oficina pública en la cual esté autorizado para gestionar.

Para los efectos de publicidad, el Colegio Nacional de Abogados confeccionara listas periódicas de sus miembros.

Artículo 8: El Colegio Nacional de

DIRECTOR:
HUMBERTO SPADAFORA
PINILLA

OFICINA:
 Editora Renovación, S. A. Vía Fernández de Córdoba
 (Vista Hermosa) Teléfono 61-7894 Apartado Postal 8-4
 Panamá 9-A República de Panamá.

LEYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS PUBLICACIONES

NUMERO SUELTO: B.0.25

GACETA OFICIAL

ORGANO DEL ESTADO

MATILDE DUFAS DE LEÓN
 Subdirectora
LUCÍA GABRIEL BOUILLIN PEREZ
 Asistente al Director

Subscripciones en la
 Dirección General de Ingresos

IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES:

Mínima: 6 meses. En la República: \$ 18.00
 En el Exterior: \$ 18.00 más porte aéreo Un año en la República: \$ 36.00
 En el Exterior: \$ 36.00 más porte aéreo

Todo pago adelantado

Abogados, no podrá negar la solicitud de Miembro a ningún abogado idóneo por razones de raza, clero, ideología o posición política; igualmente velará por el Bienestar Social de todos sus miembros y garantizará un Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado.

CAPITULO II EJERCICIO ILEGAL DE LA ABOGACIA

Artículo 9: Incurrirá en el delito de ejercicio ilegal de la abogacía:

1. La persona que sin cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta Ley, se anuncie o se haga pasar como abogado, u ofrezca servicios personales que requieran la calidad de abogado o gestione sin autorización legal.

2. El funcionario judicial, del Ministerio Público o administrativo a quien se le compruebe que directamente o por interpuesta persona realice gestiones que impliquen ejercicio de la abogacía.

3. Se exceptúan a los estudiantes graduandos en Derecho, quienes podrán actuar como voceros en causas generales. "Los infractores del presente artículo serán sancionados la primera vez con multa de cinco mil a cien mil balboas, según la gravedad del delito cometido. Toda reincidencia será castigada con el máximo de la pena. Si se tratare de funcionario público, la sanción será: suspensión por treinta días la primera vez y destitución si reincidiere".

Artículo 10: El funcionario público que admita como apoderado, asesor o vocero a persona que no sea idónea para el ejercicio de la abogacía o que en cualquier forma facilite, autorice, permita o patrocine el ejercicio ilegal de la abogacía, será sancionado con treinta días de suspensión del cargo por la primera vez y, en caso de reincidencia, con la destitución.

En igual sanción incurrá el servidor público que se niegue a aceptar la gestión de un abogado o cuando por cualquier causa o motivo entorpezca o coarte el ejercicio de su profesión.

Artículo 11: Se prohíbe a los funcionarios administrativos, judiciales o del Ministerio Público protocolizar u otorgar documentos basados en minutas que no estén elabora-

dores ad-litem, curadores en concursos de acreedores o en quiebras, partidores de bienes, defensores, asesores o voceros en asunto civil, penal o administrativo a quien no tenga la condición para ejercer la abogacía o esté autorizado por la Ley. Entre los partidores de que trata este artículo se exceptúan a los agrimensoras que deban nombrarse cuando se trate de división material de bienes inmuebles.

Artículo 12: Serán competentes para conocer las infracciones por ejercicio ilegal de la abogacía de que tratan los artículos anteriores, los jueces de circuito de lo penal.

Cualquier persona podrá denunciar las infracciones que se cometan por razón del ejercicio ilegal de la abogacía.

CAPITULO III INCOMPATIBILIDADES

Artículo 13: Los abogados que prestan servicios como funcionarios regulares, o como asesores jurídicos o consultores en cualquier dependencia del Estado o de los Municipios, o que actúen en dichas calidades bajo contrato y que, por razón de sus funciones, tengan que expedir autorizaciones, opiniones, permisos, certificaciones, o de decidir actuaciones o asuntos de cualquier naturaleza, no podrán litigar en la esfera administrativa que se relacionen con sus funciones, o con el Ministerio, entidad o dependencia oficial a la cual presten sus servicios.

El abogado que contravenga esta disposición será sancionado con la pena de suspensión de conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la presente Ley.

CAPITULO IV PROTECCION AL EJERCICIO DE LA ABOGACIA

Artículo 14: Se prohíbe a los funcionarios administrativos, judiciales o del Ministerio Público aceptar o dar curso a memoriales o escritos que tengan relación con el ejercicio de la abogacía y no hayan sido firmados o suscritos por un abogado, salvo los casos previstos en la Constitución Nacional y en las leyes.

Se prohíbe a los Notarios Públicos protocolizar u otorgar documentos basados en minutas que no estén elabora-

das y firmas por abogados, salvo que se trate de actos de carácter personal como lo son las enajenaciones, venta y gravámenes de todos los bienes muebles o inmuebles, de la propia persona.

Las actuaciones que se realicen en violación de las prohibiciones previstas en este artículo adoleceraán de nulidad, la cual puede ser declarada de oficio o a petición de parte interesada.

Artículo 15: El funcionario administrativo, judicial o del Ministerio Público que reclame el pago de derecho que no esté autorizado por la Ley, incurrirá en el delito de concusión que tipifica y castiga el Código Penal.

Siempre que se pague algún derecho, el funcionario deberá expedir un recibo en que haga constar la disposición legal que autoriza el cobro.

Artículo 16: Se prohíbe el ejercicio de la abogacía por intermedio de sociedades anónimas u otras de carácter mercantil.

Se podrá ejercer la abogacía por medio de sociedades civiles de personas, únicamente, cuando hayan sido constituidas para ese fin por abogados idóneos.

Artículo 17: Cuando no mediare contrato de servicios entre el cliente y el abogado, queda entendido que ambos se sujetan a la tarifa de honorarios vigentes.

La tarifa que regula dichos honorarios debidamente autenticada, o copia legalizada de la parte aplicable de la misma y copia auténtica de la parte pertinente de la actuación o del dictamen pericial en que el abogado haya intervenido, presten mérito ejecutivo contra el cliente remitente al pago de dichos honorarios.

CAPITULO V PROCEDIMIENTO Y SANCIONES

Artículo 18: Constituye falta a la ética, la infracción de las normas contenidas en el Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio Nacional de Abogados y de cualquier disposición legal vigente sobre tal materia.

Artículo 19: Si los hechos materia del proceso disciplinario fueran, además constitutivos del delito perseguible

de oficio, el tribunal disciplinario lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público para los efectos de rigor.

La existencia de un proceso penal sobre los mismos hechos no dará lugar a suspensión de la actuación disciplinaria.

ARTICULO 20: Las sanciones que se aplicarán al abogado infractor de la Ley que regula el ejercicio de la abogacía, de las normas del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio de Abogados o de cualquier disposición legal vigente relativa al ejercicio de la abogacía y a la ética del abogado, son las siguientes:

1. La amonestación privada, que consiste en la reprobación privada que se hace al infractor por falta cometida;
2. La amonestación pública, que consiste en la reprobación pública que se hace al infractor por falta cometida;
3. La suspensión, que consiste en la prohibición del ejercicio de la abogacía por un término no inferior a un mes ni superior a un año, cuando se trate de infractores primarios;
4. La exclusión, para los infractores reincidentes, que consiste en la prohibición para el ejercicio de la abogacía por un término mínimo de dos años.

ARTICULO 21: El Colegio Nacional de Abogados creará un Tribunal de Honor para la investigación de faltas a la ética por denuncia de parte interesada, o del funcionario del Órgano Judicial, del Ministerio Público o de la Administración Pública, que conozca del caso en relación con el cual incurrió en la falta.

ARTICULO 22: El Tribunal de Honor estará constituido por cinco abogados, elegidos de acuerdo con los Estatutos del Colegio Nacional de Abogados, por un período de dos años, quienes deben reunir los siguientes requisitos:

1. Tener por lo menos diez años de ejercicio de la abogacía.
2. Gozar de buen crédito profesional y moral y
3. No ser funcionario regular de la Administración Pública, del Órgano Judicial, ni del Ministerio Público.

Cada miembro principal tendrá un suplente, quien le reemplazará en caso de impedimento o en sus ausencias temporales o absolutas. El propio Tribunal elegirá un Presidente y un Secretario, de entre sus miembros, y su régimen interno se establecerá en los Estatutos o en Reglamentos especiales del Colegio Nacional de Abogados.

ARTICULO 23: Cuando la Corte Suprema de Justicia adviertiere que se han cometido hechos constitutivos de falta de ética profesional o cuando reciba alguna denuncia de parte interesada, solicitará al Tribunal de Honor la investigación correspondiente. Este procederá inmediatamente a investigar los hechos denunciados como falta a la ética profesional y se limitará a los hechos señalados en la denuncia. La inves-

tigación deberá ser concluida dentro de los 15 días siguientes al recibo de la comunicación de la Corte Suprema de Justicia por el Tribunal de Honor.

ARTICULO 24: La investigación tendrá por objeto:

1. Comprobar el hecho que constituya la o las faltas denunciadas, mediante la práctica de todas las diligencias convenientes al descubrimiento de la verdad.
2. Establecer las circunstancias que motivaron el hecho y los que lo justifiquen, atendiendo agravios.
3. Verificar la condición de abogado de la persona denunciada, el tiempo de ejercer la profesión y sus antecedentes disciplinarios; y
4. Determinar, además de autor las partícipes si los hubiera. El abogado denunciado tendrá la oportunidad de presentar, por escrito, al Tribunal de Honor una relación de las circunstancias que, a su juicio, lo eximian de responsabilidad en los hechos en que se le imputan.

ARTICULO 25: El Tribunal de Honor rechazará la denuncia y ordenará el archivo de la investigación cuando sea manifiesto que el hecho denunciado no fue cometido, no encuadrada en una figura calificada como falta a la ética o cuando no proceda al juzgamiento por falta de mérito.

La resolución que decrete el archivo de la investigación será motivada y no admite recurso alguno.

ARTICULO 26: Si el Tribunal de Honor estimare procedente el juzgamiento, solicitará a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia que decrete la citación a juicio del denunciado.

ARTICULO 27: El requerimiento de elevación a juzgamiento deberá contener los datos personales del acogido denunciado, a los que sean necesarios para identificarlo y una relación clara, precisa, circunstancia y específica del hecho tenido como falta a la ética y su calificación legal. Este acto será adoptado por mayoría de votos del Tribunal de Honor, con la firma autógrafa de los miembros del Tribunal que lo sustentan.

ARTICULO 28: Recibido por la Sala de Negocios Generales de la Corte el requerimiento del Tribunal de Honor, lo notificará al denunciado quien, en los cinco días siguientes, podrá:

a. Deducir excepciones; y

b. Oponerse al juzgamiento instando el archivo del proceso.

ARTICULO 29: Vencido el término del artículo anterior o decididas las excepciones, según el caso, la referida Sala de la Corte ordenará el archivo del expediente por falta de mérito para el juzgamiento o decretará la elevación a juicio, según proceda. Este acto de clausura la investigación.

ARTICULO 30: Cuando no fuere posible hacer al denunciado para notificárselo el requerimiento del Tribunal de Honor, se le emplazará por edicto que permanecerá fijado en la Secretaría de la Corte Suprema por un término de diez días y copia del edicto se le enviará por correo a la dirección profesio-

nal o domiciliaria disponible. Si dentro de los tres días siguientes a la desfijación, del edicto, el denunciado no compareciera, se le designará un defensor de cueste, quien lo representará ento- do el trámite del juzgamiento.

ARTICULO 31: La resolución que eleva la investigación a juicio contendrá los datos exigidos para el requerimiento de elevación señalados en el artículo 27 y, además, el nombre y las generales del denunciante o de la legación de la autoridad o corporación pública que denunció el hecho.

ARTICULO 32: En la misma resolución que eleva la investigación a juicio se fijará un término no menor de diez días, ni mayor de quince para la celebración del debate oral, en cuyo acto se practicarán las pruebas que presenten las partes.

ARTICULO 33: A la hora señalada para la celebración del juicio oral, el magistrado sustanciador declarará abierto el acto, el secretario leerá la resolución que contenga los cargos y se practicarán las pruebas. Acto seguido será oído en su orden, el Ministerio Público y el acusado o su defensor, por una sola vez. Terminada la audiencia, los miembros de la Sala de Negocios Generales de la Corte se reunirán en sesión secreta para deliberar. La decisión será dada inmediatamente y, si es de condena, indicará la sanción que corresponde al acusado.

Sólo cuando dicha Sala de la Corte considere que es necesario un plazo para decidir, la sentencia no se pronunciará en el acto de la audiencia.

ARTICULO 34: En todo proceso de juzgamiento por falta de ética será ofidio el Procurador de la Administración como parte.

ARTICULO 35: Dado el carácter disciplinario de estas normas, la Corte está dotada de amplia discrecionalidad para imponer la sanción que corresponda, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y modalidad de la falta y los antecedentes personales y profesionales del infractor, y sin perjuicio de las acciones y sanciones civiles y penales a que hubiere lugar.

ARTICULO 36: Sólo cuando se haya impuesto como sanción la suspensión o exclusión para el ejercicio de la abogacía, el sentenciado podrá recurrir en reconsideración, dentro de los tres días siguientes de su notificación.

ARTICULO 37: La resolución condenatoria que concluye el proceso será notificada personalmente al sancionado. Se entiende personalmente notificada la resolución cuando ha sido leída en el acto de audiencia, en presencia del acusado, de lo cual el Secretario dejará constancia documentada.

Cuando no fuera posible la notificación personal en la forma prevista en este artículo, la sentencia condenatoria se entenderá notificada, para todos sus efectos legales, desde su publicación, en la forma que se indica en el artículo 40.

ARTICULO 38: La acción disciplinaria prescribe en un año, que se computa desde el día en que se perpetró el ini-

mo acto constitutivo de la falta. La iniciación del proceso interrumpe la prescripción.

ARTICULO 39: El proceso disciplinario se adelantará en papel común, en original y una copia, y sobre esta se señalarán los traslados al acusado.

ARTICULO 40: La resolución en virtud de la cual se suspenda o cancele un certificado de idoneidad, se lo dará publicidad tanto en la Gaceta Oficial como en un diario de circulación nacional, y se darán instrucciones a la Secretaría General de la Corte para que el nombre del abogado sea eliminado del Registro de Abogados y del Colegio Nacional de Abogados.

ARTICULO 41: El abogado a quien se le hubiere cancelado el certificado de idoneidad podrá ser rehabilitado por la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia a petición del mismo, si se dan las siguientes condiciones:

1. Que haya transcurrido un lapso no

- menor de las dos terceras partes del tiempo de la sanción impuesta;
2. Que, a juicio de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, aparezca demostrado que la conducta observada por el sancionado revela su completa rehabilitación moral reingresar a la profesión.

En las actuaciones sobre rehabilitación es parte el Procurador de la Administración. La decisión se emitirán dentro de los treinta días siguientes a la práctica de las pruebas decretadas en oficio o a solicitud de parte, durante los términos que prudencialmente señale la Corte sin que excedan de treinta días.

CAPITULO VI DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 42: Las disposiciones del Capítulo V de esta Ley regirán hasta que el nuevo Código Judicial entre en vigencia.

ARTICULO 43: Esta Ley deroga las Leyes 54 de 1941, 58 de 1949 y los artículos 27 y 28 de la Ley 51 de 1931 y cualesquiera otras disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

Dada en la ciudad de Panamá, a los días del mes de mil novecientos ochenta y cuatro.

H.R. PROF. LORENZO S. ALFONSO
Presidente del Consejo Nacional de Legislación

CARLOS CALZADILLA GONZALEZ
Secretario General del Consejo Nacional de Legislación

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL -
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA -
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA
18 DE ABRIL DE 1984

JORGE E. HILLUECA
Presidente de la República

RODOLFO CHIARI DE LEON
Ministro de Gobierno y Justicia

AVISOS Y EDICTOS

EDICTOS PENALES:

EDICTO EMPLAZATORIO No.9

El suscripto Juez Tercero del Circuito de Panamá, Ramo Penal, Emplaza a ISAAC EUSEBIO MARES CEDEÑO, varón, panameño, unido, con cédula No. S-209-2565, hijo de Eusebio Mares y Juana Cedeno, residente en calle Julio N. Sousa, Casa No. 3216; a fin de notificarse el fallo condenatorio expedido por este Tribunal y que en su parte resolutiva dice así:

JUZGADO TERCERO DEL CIRCUITO DE PANAMA, RAMO PENAL. Panamá, veintidós -22- de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro -1984.-

VISTOS:

En mérito de lo expuesto el suscripto JUEZ TERCERO DEL CIRCUITO DE PANAMA, RAMO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONDENÓ a ISAAC EUSEBIO MARES CEDEÑO, varón, panameño, unido, con cédula No. S-209-2565, nacido el 19 de enero de 1959, hijo de Eusebio Mares y Juana Cedeno, residente en calle Julio N. Sousa, casa No. 3216; a sufrir la pena de OCHO -8- MESES DE PRISIÓN que deberá cumplir en el establecimiento de castigo que designe el Órgano Ejecutivo como responsable del delito de Lesiones Personales en perjuicio de Luis Alberto Flores Merida.

Notifíquese este fallo en los términos del artículo 2349 del Código Judicial. Fundamento de Derecho Arts. 1, 2, 13, 14, 17, 18, 27, 38, 43, 60 del Código Penal y Art. 418 de la Ley 51 de 1931

y Arts. 2034, 2035, 2151, 2153, 2157, 2219 y 2349 del Código Judicial.

Cópiese, notifíquese y consultese. (FDO) EL JUEZ: LICDO. OSWALDO M. FERNANDEZ E., Rosario A. de Jiménez Secretaria.

Por tanto de conformidad a lo preceptuado en el artículo 2349 del Código Judicial, se libra el presente edicto emplazatorio a fin de que quede legalmente notificado del fallo en referencia.

So pena de ser juzgado como encubridores si conociéndole no lo denunciaren exceptuándose del presente mandato los incluidos en el artículo 2036 Ibídem.

Asimismo se pide la cooperación a las autoridades policivas y judiciales a que ayuden a la captura del mismo.

Se fija el presente Edicto en lugar visible de la secretaría del Tribunal, por el término de diez -10- días a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

Dado en la ciudad de Panamá, a los nueve -9- días del mes de abril de mil novecientos ochenta y cuatro -1984-. El Juez,

Licdo. Rogelio A. Saltarín.
Rosario A. de Jiménez
Secretaria
(Oficio 659)

EDICTO EMPLAZATORIO No. 1
AL SUSCRITO JUEZ MUNICIPAL DE
LA MIRADA CATEGORÍA D DEL DISTRITO
DE AGUADULCE EN ESTE MEDIO
CITA A EMPLAZAR A EDUARDO ANTONIO HERNANDEZ MORENO, varón de 43 años de edad, soltero, conductor, nació en David, provincia de Chiriquí, el día 10. de septiembre de 1941, residente en Calle Sur C, entre las Calles Sexta y Séptima Este, cursó hasta sexto grado escuela primaria, cédulo No. 4-70-87, hijo de Segundo Hernández y Hermelinda Moreno, por infractor de las disposiciones contenidas en el TÍTULO I CAPITULO II del LIBRO SEGUNDO del CÓDIGO PENAL VIGENTE o sea por el delito de LESIONES CULPOSAS. Provea el enjuiciado los medios de su defensa. Se concede a las partes el término de seis (6) días para que aduzcan las pruebas que estimen convenientes, y se SOLICITA DE INSTITUCIONALMENTE, a favor de la señora FERNANDA MAGDALENA ALFONSO LIZON DUARTE, esposa, mujer, mayor de edad, de 33 años de edad, casada, nació en El

y Séptima Este, cursó hasta sexto grado escuela primaria, cédulo No. 4-70-87, hijo de Segundo Hernández y Hermelinda Moreno, a fin de que concurre a este Tribunal dentro del término de diez (10) días, más el de la distancia, contados a partir de la publicación del EDICTO en la GACETA OFICIAL, para que se notifique del AUTO DE PROCEDER, emitido en su contra por este Tribunal, y que es del tenor siguiente:

JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO, Aguadulce, ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y tres.

VISTOS.....

Por tales consideraciones, el suscripto Juez Municipal de Primera Categoría del Distrito de Aguadulce, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ABRE CAUSA CRIMINAL contra EDUARDO ANTONIO HERNANDEZ MORENO, varón, de 43 años de edad, soltero, conductor, nació en David, provincia de Chiriquí, el día 10. de septiembre de 1941, residente en Calle Sur C, entre las Calles Sexta y Séptima Este, cursó hasta sexto grado escuela primaria, cédulo No. 4-70-87, hijo de Segundo Hernández y Hermelinda Moreno, por infractor de las disposiciones contenidas en el TÍTULO I CAPITULO II del LIBRO SEGUNDO del CÓDIGO PENAL VIGENTE o sea por el delito de LESIONES CULPOSAS. Provea el enjuiciado los medios de su defensa. Se concede a las partes el término de seis (6) días para que aduzcan las pruebas que estimen convenientes, y se SOLICITA DE INSTITUCIONALMENTE, a favor de la señora FERNANDA MAGDALENA ALFONSO LIZON DUARTE, esposa, mujer, mayor de edad, de 33 años de edad, casada, nació en El

Cristo. Distrito de Aguadulce, el día 31 de julio de 1958, de oficios domésticos cursó hasta sexto año de escuela secundaria, cédula No. 2-88-1846, hija de BENJAMIN DE LEÓN QUIROZ y ARCEÑA JUAREZ de DE LÉON, de conformidad con el ordinal 3o. del artículo 2136 del Código Judicial, Derecho; artículos 2147 y 2136 del Código Judicial, COPIESE Y NOTIFIQUESE.

El Juez Municipal;

La Secretaría

Se advierte a el sindicado EDUARDO ANTONIO HERNANDEZ MORENO, que deberá comparecer a este Tribunal dentro del término concedido, de no hacerlo dicho auto quedará notificado para todos los efectos legales y la causa seguirá sin su intervención.

Recuérdese a todos los habitantes de la República y del orden judicial de la obligación que tienen de denunciar el paradero del emplazado, so pena de incurrir en encubrimiento por el delito imputado.

Por tanto, se fija el presente EDICTO en lugar visible y de costumbre de ésta secretaría y copias del mismo se remite a la GACETA OFICIAL, para su publicación por una sola vez.

Dado en la ciudad de Aguadulce, a los cinco días del mes de abril de 1984, mil novecientos ochenta y cuatro.

Héctor E. González (fdo)

Juez Municipal.

Dimas E. Espinosa O. (fdo)

Secretario.

Aguadulce, 5 de abril de 1984.

Oficio 412

EDICTO EMPLAZATORIO No. 98-62

El suscrito Juez Sexto del Circuito de Panamá, Ramo Penal cita y emplaza a EFRAIN OCTAVIO JAEN, a fin de que concorra a este Tribunal dentro del término de diez días más el de la distancia contados a partir de la publicación del Edicto en la Gaceta Oficial, para que se notifique del auto de proceder emitido en su contra por este Despacho y que es del tenor siguiente:

"JUZGADO SEXTO DEL CIRCUITO DE PANAMA RAMO PENAL.-Panamá veintiséis de agosto de mil novecientos ochenta y dos.

VISTOS:
Por todo lo anterior el suscrito, JUEZ SEXTO DEL CIRCUITO DE PANAMA RAMO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la LEY, LLAMA A JUICIO a EFRAIN OCTAVIO JAEN, de generales desconocidas en auto como infractor de disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título XI, Libro II del Código Penal.

Movilizar al imputado de todos los medios adecuados para el ejercicio de su defensa.

Quíntana, cinco días y treinta y tres (33) días para efectuar las siguientes pruebas de que habrán de servir de criterio.

En la Oficina de la Gaceta Oficial.

va del sindicado y su notificación por edicto empalzatorio.

Fundamento Legal: Artículo 2147, 2338 del Código Judicial, Decreto de Gabinete 283 de 1970.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

(fdo.) Lledo, Florencio Bayard A., Juez Sexto del Circuito Penal.- (fdo) Carlota de Crespo, Secretaria".

Se advierte al sindicado JAEN, que deberá comparecer a este Tribunal dentro del término concedido, de no hacerlo dicho auto quedará notificado, para todos los efectos legales, la causa seguirá sin su intervención.

Recuérdese a todos los habitantes de la República y a la autoridad del orden judicial de la obligación que tienen de denunciar el paradero del emplazado, so pena de incurrir en encubrimiento por el delito imputado.

Por tanto, se fija el presente Edicto en lugar visible y de costumbre de esta Secretaría y copia del mismo se remite a la Gaceta Oficial, para su publicación por una sola vez.

Dado en la ciudad de Panamá, a los trece de septiembre de mil novecientos ochenta y dos.

Lledo, Florencio Bayard A.,

Juez Sexto del Circuito

Penal,

Carlota de Crespo

Secretaria

vdo,

(Oficio 1783)

(fdo.) MAG. JAIME E. OLMO D.

(fdo.) MAG. JULIO E. PEREZ R.

(fdo) Carlos H. Tomlinson H.

Secretario

Se advierte al sindicato CRUZ ABREGO, que deberá comparecer a este Tribunal dentro del término concedido, de no hacerlo dicho auto quedará notificado, para todos los efectos legales, la causa seguirá sin su intervención.

Recuérdese a todos los habitantes de la República y a la autoridad del orden judicial de la obligación que tienen de denunciar el paradero del emplazado, so pena de incurrir en encubrimiento por el delito imputado.

Por tanto, se fija el presente Edicto en lugar visible y de costumbre de esta Secretaría, y copia del mismo se remite a la Gaceta Oficial, para su publicación por una sola vez.

Dado en la ciudad de Panamá a los veintiseis días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y dos.

Lledo, Florencio Bayard A.,

Juez Sexto del Cto. Penal

Carlota de Crespo

Sra,

(Oficio 2135)

vdo.

EDICTO EMPLAZATORIO No 190-82

El suscrito Juez Sexto del Circuito de Panamá, Ramo Penal cita y emplaza a RAFAEL ERNESTO PALMA LEZCANO a fin de que concorra a este Tribunal dentro del término de diez días más el de la distancia, contados a partir de la publicación del Edicto en la Gaceta Oficial, para que se notifique de la sentencia condenatoria emitida en su contra por el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA y que es del tenor siguiente:

"SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.-Panamá tres de setiembre de mil novecientos ochenta y dos.

VISTOS:

En mérito de lo expuesto el Segundo Tribunal Superior administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley CONFIRMA la resolución judicial impugnada.

FUNDAMENTO DE RECHAZO: Artículos: 2034, 2035, 2152, 2153, 2155, y 2299 del Código Judicial. Artículos: 1, 30, 43, 60, 80, 81, 318 (subrayado por el Artículo Tercero del Decreto de Gabinete No. 14, de 30 de marzo de 1968) del Código Penal, Artículo 116 del Decreto No. 158 de 10 de setiembre de 1970 (Reglamento Tránsito). NOTIFICA AL SINDICADO CRUZ ABREGO.

Contra el cual se han presentado recursos de apelación y se ha establecido la fecha de audiencia para el 10 de mayo de 1984.

Por las anteriores consideraciones el suscrito JUEZ SEXTO DEL CIRCUITO DE PANAMA, RAMO PENAL administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley LLAMA A JUICIO a RAFAEL ERNESTO PALMA LEZCANO, varón, panameño, trigueño, albastro, unido, nacido en Panamá, el día 13 de marzo de 1958, con cédula de I.P. No. S-441-486, hijo de Concepción Palma Ayala y María Estela Lezcano, residente en Villa Llerena, Multifamiliar No. 16 apodamiento "La", en jurisdicción hasta el punto de acuerdo para el ejercicio de disposiciones legales, conviviente en el Circuito I, Distrito VIII, el día 10 de mayo de 1984.

Contra el cual se han presentado recursos de apelación y se ha establecido la fecha de audiencia para el 10 de mayo de 1984.

tres días para aducir todas aquellas pruebas de que intenten valerse en el plenario.

Fundamento Legal: Artículo 2147 del Código Judicial y Decreto de Gabinete No. 283 de 1970.

COPIESE Y NOTIFIQUESE

(Fdo)

Licdo. Florencio Bayard A.
Juez Sexto del Circuito
Ramo Penal

(Fdo)
Carlota de Crespo
Sra.

Se advierte al sindicado PALMA LEZ-CANO que deberá comparecer a este Tribunal dentro del término concedido, de no hacerlo dicho auto quedará notificado para todos los efectos legales, la causa seguirá sin su intervención.

Recuérdese a todos los habitantes de la República y a la autoridad del orden judicial de la obligación que tienen de denunciar el paradero del emplazado, so pena de incurrir en encubrimiento por el delito imputado.

Por tanto, se fija el presente Edicto en lugar visible y de costumbre de esta Secretaría y copia del mismo se remite a la Gaceta Oficial, para su publicación por una sola vez.

Dado en la ciudad de Panamá, a los quince días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y dos.

Licdo. Florencio Bayard A.
Juez Sexto del Circuito
Penal.

Carlota de Crespo
Secretaria
(Oficio 1787)

EDICTO EMPLAZATORIO No. 35-82

El suscrito Juez Sexto del Circuito de Panamá, Ramo Penal, cita y emplaza a JAIRO ROEL JARAMILLO a fin de que concorra a este Tribunal dentro del término de diez días más el de la distancia contados a partir de la Publicación del Edicto en la Gaceta Oficial, para que se notifique de la sentencia de Segunda Instancia emitida en su contra por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y que es del siguiente tenor:

"SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. --Panamá, treinta de mayo de mil novecientos ochenta y uno.
VISTOS:

Por lo expuesto, el Segundo Tribunal Superior de Justicia en nombre de la República, y por autoridad de la Ley CONFIRMA la sentencia consultada.

Cópiale, notifíquese y devuélvase. (Fdo) Mag. ALVARO CEDENO BARAHONA.

(Fdo) Mag. JAIME E. OLMO

S.

(Fdo) Mag. JULIO E. PEREZ R.

(Fdo) Mag. WILFREDO SAENZ F.

(Fdo) Mag. JUAN S. ALVARADO

(Fdo) Carlos H. Tomlinson H.

Secretario

cita de drogas.

Se ordena notificar la presente resolución mediante edicto emplazatorio al reo rebelde.

Comptítesele al sentenciado el tiempo que estuvo detenido preventivamente,

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 682, 684, 722, 2035, 2152, 2153, 2155, 2215, 2216, 2219, 2340, 2345, 2348, 2349, 2350, 2355 del Código Judicial, 13, 14, 45, 48, 51, 52, 53, 60, 69, 230, del Código Penal vigente.

CONSULTESE.

(Fdo) Florencio Bayard A., Juez Sexto del Circuito Penal. (Fdo.) Carlota de Crespo (Sra.).

Se advierte al sindicado que deberá comparecer a este Tribunal dentro del término concedido de no hacerlo dicha sentencia quedará notificada para todos los efectos legales, la causa seguirá sin su intervención.

Recuérdese a todos los habitantes de la República y por autoridad del orden judicial, de la obligación que tienen de denunciar el paradero del emplazado, so pena de incurrir en encubrimiento por el delito imputado.

Por tanto, se fija el presente Edicto en lugar visible y de costumbre de esta Secretaría y copia del mismo se remite a la Gaceta Oficial, para su publicación por una sola vez.

Dado en la ciudad de Panamá a los veinte días del mes de junio de mil novecientos ochenta y dos.

Licdo. Florencio Bayard A.,
Juez Sexto del Circuito Penal.

Licdo. Florencio Bayard A.
Juez Sexto del Circuito
Penal.

Carlota de Crespo
Secretaria
(Oficio 996)

Carlota de Crespo
Sra.
(Oficio 2640)

EDICTO EMPLAZATORIO No. 92-83

El suscrito Juez Sexto del Circuito de Panamá, Ramo Penal, cita y emplaza a GALLAGHER RONALD WAYNE, a fin de que concorra a este Tribunal dentro del término de diez días más el de la distancia a partir de la publicación en la GACETA OFICIAL, para que se notifique de la sentencia condenatoria, emitida en su contra por este Tribunal y que es del tenor siguiente:

"JUZGADO SEXTO DEL CIRCUITO DE PANAMA, RAMO PENAL. Panamá, cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.

VISTOS:

Por las anteriores consideraciones el suscrito JUEZ SEXTO DEL CIRCUITO DE PANAMA, RAMO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONDENA a GALLAGHER RONALD WAYNE, varón norteamericano, con Seguro Social No. 527-21-3998, nacido en los Estados Unidos el 10 de diciembre de 1957, hijo de Ronald Wayne Jacqueline June, residente en Howard, Zona del Canal de Panamá, a la pena de CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS POR IGUAL PERÍODO Y 34 DIAS MULTA QUE CORRESPONDE A 17 DIAS DE PRISIÓN EN CASO DE NO PAGARSE, además de las costas rebeldes por el delito de posesión ill-

EDICTO EMPLAZATORIO No. 92-83

El suscrito Juez Sexto del Circuito de Panamá, Ramo Penal, cita y emplaza a THEODORE GILMORE WALTER HALPEN, a fin de que concorra a este Tribunal dentro del término de diez días más el de la distancia a partir de la publicación en la GACETA OFICIAL, para que se notifique de la sentencia condenatoria, emitida en su contra por este Tribunal y que es del tenor siguiente:

"JUZGADO SEXTO DEL CIRCUITO DE PANAMA, RAMO PENAL, Panamá veintimundo de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

VISTOS:

Por las anteriores consideraciones el suscrito JUEZ SEXTO DEL CIRCUITO DE PANAMA, RAMO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONDENA a THEODORE GILMORE WALTER HALPEN, varón, panameño, con cédula de LP.No. 8-219-1267, hijo de Theodore Walter y Josefa Halphen de Walter, residente en Barriada Los Angeles (detras de la casa Rosada) a la Penas de CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN

por igual periodo; 34 días Multa que corresponden a 17 días de prisión en caso de no presentarse en efectivo y las costas por rebeldía, por el delito de Posesión Ilícita de Drogas.

Se ordena notificar al sentenciado de la presente resolución mediante edicto emplazatorio.

Comuníquese al sentenciado el tiempo que estuvo detenido preventivamente.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 682, 684, 799, 2035, 2151, 2152, 2153, 2156, 2215, 2216, 2219, 2340, 2345, 2346, 2349, 2350, 2355 del Código Judicial, 13, 14, 48, 47, 48, 51, 52, 56, 58, 59, 269 del Código Penal.

NOTIFIQUESE Y CONSULTESE
(Fdo.) Licdo. Florencio Bayard A., Juez Sexto del Circuito Penal. (Fdo.) Carlota de Crespo, Sra.

Se advierte al sindicado que deberá comparecer a este Tribunal dentro del término concedido de no hacerlo dicha sentencia quedará notificada para todos los efectos legales, la causa seguirá sin su intervención.

Recuérdese a todos los habitantes de la República y del orden judicial de la obligación que tienen denunciar el paradero del emplazado, se pena de incurrir en encubrimiento por el delito imputado.

Por tanto, se fija el presente EDICTO en lugar visible y de costumbre de esta Secretaría y copia del mismo se remite a la GACETA OFICIAL para su publicación por una sola vez.

Dado en la ciudad de Panamá, a los veintidós días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.

Licdo. Florencio Bayard A.,
Juez Sexto del Circuito Penal.

Carlota de Crespo
Sra.
(Oficio 2541)

EDICTO EMPLAZATORIO No. 6
La suscrita Juez Municipal del Distrito de San Miguelito, por medio del presente Edicto,

CITA Y EMPLAZA

A ELIAS ANTONIO DECRAZIA CALCEDO, varón, panameño, casado, mecánico, conductor, nacido en La Chorrera, provincia de Panamá el día 1 de abril de 1943, de 39 años de edad, con cédula de identidad personal No. 8-382-409, con residencia en este distrito, Corregimiento Belisario Porras, Cerro Batea, por la piquera vieja, casa G-81, hijo de Aniceto Calcedo y Digna DeGracia Carrillo, cursó el segundo año de educación secundaria; de paradero desconocido, para que en el término de diez días más el de la distancia contados a partir de la única publicación en la Gaceta Oficial, tal como lo prevee el artículo 2340 del Código Judicial, re-

formado por el Decreto de Gabinete No. 112 de 1969, comparezca a este Tribunal a estar en derecho en el proceso que se le sigue por infractor de disposiciones contenidas en el Libro II, Título I, Capítulo II del Código Penal en perjuicio de JOSE ANTONIO MENDIEZA y a notificarse de la sentencia condonatoria, cuya parte resolutiva es del tenor siguiente:

"...JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUELITO, RAMO PENAL, veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro.

....Por lo anterior, la suscrita Juez Municipal del Distrito de San Miguelito, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA RESPONSABLE a ELIAS ANTONIO DE GRACIA CALCEDO, varón, panameño, casado, mecánico, conductor, nacido en La Chorrera, Provincia de Panamá, el día 1 de abril de 1943, de 39 años de edad, con cédula de identidad personal No. 8-382-409 con residencia en este distrito, Corregimiento Belisario Porras, Cerro Batea, por la piquera vieja, casa No. C-81; hijo de Aniceto Calcedo y Digna de Gracia Carrillo, cursó el segundo año de educación secundaria; y lo CONDENÓ a 40 días multas a razón de TRES BALBOAS (B./3.00) diarios totalizando la suma de CIENTO VEINTE BALBOAS (B./120.00), a favor del Tesoro Nacional. Se advierte que a esta multa debe ser pagada en el término de dos (2) meses a partir del día de la notificación al condenado y que en caso de incumplimiento se convertirá en pena de prisión de (1) día por cada dos (2) días multas.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 711, 2152, 2153, siguientes y concordantes del Código Judicial y artículo 135 del Código Penal y artículo 43 de la Constitución Nacional. Artículo 13 del Código Penal.

Notifíquese y Cumplase. La Juez. (fdo). Licda. Gloriela del Carmen Urrutia J. El Secretario (fdo). César A. Gordillo ".

Se advierte a todos los habitantes de la República y a las autoridades del orden judicial y político, de denunciar el paradero del emplazado se pena de incurrir en el delito por el cual se le encusa. Para notificar al emplazado de lo anterior se fija el presente Edicto en lugar público y visible del despacho de la Secretaría del Tribunal hoy once de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, siendo las diez de la mañana y copia de la misma se remite en la fecha, a quien corresponde darle publicación legal.

La Juez

LICDA. GLORIELA DEL CARMEN URRUTIA J.
CESAR A. GORDILLO SANJUR
Secretario

EDICTO EMPLAZATORIO No. 7

La suscrita Juez Municipal del distrito de San Miguelito, por medio del presente Edicto,

CITA Y EMPLAZA

A ALEXIS RAMOS MURILLO, varón, panameño, unido, manipulador de alimentos, nacido en Yaviza, provincia del Darién el día 21 de agosto de 1962, de 21 años de edad, con cédula de identidad personal No. 5-13-1289, hijo de Simón Ramos y de Juliana Murillo, con residencia en este distrito, Corregimiento Belisario Porras, Don Bosco, sector 2, casa No. 15-M, de paradero desconocido, para que en el término de diez días más el de la distancia contados a partir de la única publicación en la Gaceta Oficial, tal como lo prevee el artículo 2340 del Código Judicial, referido por el Decreto de Gabinete No. 112 de 1969, comparezca a este Tribunal a estar en derecho en el proceso que se le sigue por infractor de disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título IV, del Libro II del Código Penal, en perjuicio de VICTORIA MARTINEZ CEDENO y a notificarse de la sentencia condonatoria, cuya parte resolutiva es del tenor siguiente:

"...JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUELITO, RAMO PENAL, veinte de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). Por lo anterior expuesto, la suscrita Juez Municipal del Distrito de San Miguelito, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA RESPONSABLE a ALEXIS RAMOS MURILLO, varón, panameño, unido, manipulador de alimentos, nacido en Yaviza, Provincia de Darién el día 21 de agosto de 1962, de 21 años de edad, con Ramos y de Juliana Murillo con residencia en este distrito corregimiento Belisario Porras, Don Bosco, sector 2, casa 15M de los cargos imputados en el auto de proceder en contra de VICTORIA MARTINEZ CEDENO y la CONDENA a NUEVE (9) MESES Y VEINTICUATRO (24) días de prisión y de los gastos procesales. Computase para efectos de cumplir la condena el tiempo que estuvo detenido.

Se advierte a todos los habitantes de la República y las autoridades del orden Judicial y Político de denunciar el paradero del Emplazado se pena de incurrir en el delito por el cual se le encusa. Para notificar al emplazado de lo anterior se fija el presente Edicto en lugar público y visible del despacho de la Secretaría del Tribunal hoy once de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, siendo las diez de la mañana y copia de la misma se remite en la fecha, a quien corresponde darle publicación legal.

La Juez,
LICDA. GLORIELA DEL CARMEN URRUTIA J.
CESAR A. GORDILLO SANJUR
Secretario

AGRARIOS:

DEPARTAMENTO DE CATASTRO
ALCALDIA DEL DISTRITO DE LA
CHORRERA

EDICTO No.146

El suscrito Alcalde del Distrito de La Chorrera, hace saber que el señor RAFAEL ANTONIO MORENO BONILLA, panameño, mayor de edad, soltero, Independiente, residente en el Coco, portador de la cédula de Identidad Personal No.8-111-877, en su propio nombre o representación de su persona ha solicitado a este Despacho que se le adjudique a Título de plena propiedad, en concepto de venta un lote de terreno municipal, urbano localizado en el lugar denominado El Paso de la Barriada Altos de San Fco.

corregimiento de Guadalupe donde se llevará a cabo una construcción distinguida con el número y cuyos linderos y medidas son los siguientes:

NORTE: Calle El Paso, con 20.00 M.
SUR: Resto de la Finca 58848, f. 266, t. 1358, ocupado por David Flores, con 20.00 m.

ESTE: Resto de la Finca 58848, f. 256 t. 1358, ocupado por Moisés Castillo, con 25.00 m.

OESTE: Calle El Jardín, con 25.00 m.
AREA TOTAL DEL TERRENO: QUI-
NIENTES METROS CUADRADOS (500.
00M2).

Con base a lo que dispone el artículo 14 del Acuerdo Municipal No.11 del 6 de marzo de 1909, se fija el presente

Edicto en un lugar visible al lote de terreno solicitado, por el término de diez (10) días para que dentro de dicho plazo o término puedan oponerse las que se encuentren afectadas.

Entregúesele sendas copias del presente Edicto al interesado para su publicación por una sola vez en un periódico de gran circulación y en la Gaceta Oficial.

La Chorrera, 22 de junio de mil no-
vecientos ochenta y tres.

EL ALCALDE:

(fdo) Prof. Bienvenido Cárdenas V.
Jefe del Depto. de Catastro:
(fdo) Sra. Alejandrina Cruz M.
(1.072499)
Única Publicación.

PANAMA, REPUBLICA DE
PANAMA.
MINISTERIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO.
DIRECCION NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA.
DIRECCION REGIONAL.
ZONA No. 5 - CAPIRA.
EDICTO No. 032-DRA-84

El Suscrito, Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la provincia de Panamá, Región No 5 - Capira, al público,

HACE SABER;

Que el señor (a) MARCOS EVANGELISTA MUÑOZ FERNANDEZ, vecino (a) del Corregimiento de NUEVA GORGONA, Distrito de CHAME, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante la Solicitud No. 8-172-83, la adjudicación a Título Oneroso de una parcela que forma parte de la Finca No. 5655, Tomo 157, Folio 118, Sección de la propiedad de la Nación, con una superficie de 0 Has. 1,000.00, metros cuadrados, ubicada en el Corregimiento de NUEVA GORGONA, Distrito de CHAME, de esta provincia, cuyos linderos son los siguientes:

NORTE: Terreno de Martín Ramos Pinto.
SUR: Terreno de Domingo De la Rosa Muñoz.

ESTE: Camino hacia otros lotes.
OESTE: Camino hacia Nueva Gorgona.

Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este despacho, en la Alcaldía del distrito de CHAME, copias del mismo se entregarán al interesado para que las haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como

lo ordena el Artículo 108, del Código Agrario.

Este Edicto, tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

Dado en Capira, a los 20, días del mes de febrero de 1984.

ALCIS BARRIOS,
Funcionario Sustanciador.
Sofía C. de González,
Secretaría Ad-Hoc.

PANAMA REPUBLICA DE
PANAMAMINISTERIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO.
DIRECCION NACIONAL
DE REFORMA AGRARIA.
DIRECCION REGIONAL.
ZONA No. 5 - CAPIRA.
EDICTO No. 039-DRA-84.

El Suscrito, Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la provincia de Panamá, al público,

HACE SABER:

Que el señor (a) NILIA ELENA PEREZ CORDOBA, vecino (a) del Corregimiento de BEJUCO, Distrito de CHAME, portador (a) de la cédula de Identidad Personal No. 8-155-1051, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No. 8-200, la adjudicación a título oneroso de 50 Has. 881.9753 metros cuadrados, ubicado en BAJO LAS TINAJAS, Corregimiento de CABUYA, Distrito de CHAME, provincia de Panamá, cuyos linderos son los siguientes:

NORTE: Terreno de Cirilo Navarro, Qda. El Astillero, y Antonio Muñoz.

SUR: Qda. Cerro Viento, Portillo Quirós, Callejón, y Pueblo Menchaca.

ESTE: Camino a Cabuya y

a la C.I.A., Pablo Menchaca y Antonio Muñoz.

OESTE: Terreno de Dolores Coronado y Porfirio Quirós.

Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este despacho, en el de la Alcaldía del Distrito de CHAME, y copias del mismo se entregarán al interesado para que las haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como ordena el Artículo 108, del Código Agrario.

Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

Dado en Capira, a los 22 días del mes de marzo de 1984.

ALCIS BARRIOS,
Funcionario Sustanciador.
Sofía C. de González,
Secretaría Ad-Hoc.

PANAMA, REPUBLICA DE

PANAMA.
MINISTERIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO.
DIRECCION NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA.
DIRECCION REGIONAL.
ZONA No. 5.

EDICTO No. 044-DRA-84.

El Suscrito, Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, al público,

HACE SABER:

Que el (a) Señor (a) F. VARISTO CRUZ SERRANO, vecino (a) del Corregimiento de HERREIRA, distrito de LA CHORRERA, portador (a) de la cédula de identidad personal No. 8-48-12-29 ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante Solicitud No. 8-142-48, la adjudicación a Título Oneroso, de dos (2) parcelas es-

tatales adjudicables, en el Corregimiento de HERREIRA, Distrito de LA CHORRERA, de esta provincia, las cuales se describen a continuación:

PARCELA #1: Ubicada en SANGUENGA, con una superficie de 4 Has. 2587.02 metros cuadrados y dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Quebrada El Caraño y Terreno de Vidal Carrasco.

SUR: Camino a Sangüenga y a otras fincas.

ESTE: Terreno de Francisco Gutiérrez.

OESTE: Qda. El Caraño y Camino a Sangüenga.

PARCELA #2: Ubicada en SANGUENGA, con una superficie de 4 Has - 6927.55 metros cuadrados y dentro de los siguientes linderos:

NORTE: Camino a Sangüenga y a otras fincas.

SUR: Terreno de Julio Díaz.

ESTE: Camino a Sangüenga y terreno de Julio Díaz.

OESTE: Camino al Zaine y otras fincas.

Para los efectos legales, se fija el presente EDICTO en lugar visible de este despacho, en el de la Alcaldía del distrito de LA CHORRERA y copias del mismo se entregarán al interesado para que las haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el Artículo 108 del Código Agrario. Este EDICTO tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación.

Capira, 2 de marzo de 1914.

ALCIS BARRIOS
FUNCIONARIO SUSTANCIADOR
Sofía C. de González
Secretaría Ad-Hoc